

NOMENCLATURA	: 1. [40] Sentencia
JUZGADO	: 23° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-13848-2013
CARATULADO	: HALABI / BANCO SANTANDER

Santiago, veinticuatro de Febrero de dos mil diecisiete

Vistos,

A fojas 1, comparece don Luis Enrique Halabi Lorca, factor de comercio, domiciliado en Paseo Huérfanos N° 1022, departamento 1408, comuna de Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del Banco Santander-Chile, representado por su gerente general don Claudio Bruno Melandri Hinojosa, ingeniero comercial, ambos domiciliados en calle Bandera N° 140, comuna de Santiago.

Refiere como antecedente previo que hasta inicios de 2009 era un empresario exitoso, siendo socio mayoritario y representante legal de Inversiones Vorend Chile Limitada e Inversiones La Troya Limitada, teniendo tanto él como sus empresas un destacado comportamiento comercial y financiero.

Explica que en septiembre de 2008, conoció a don Julio César Lacámara Zulueta, quien se presentó como empresario y propietario de Consorcio Gastronómico Limitada (Conga), entre otras actividades, manifestándole su intención de hacer negocios con él y ofreciendo contactarlo con un importante gerente del Banco Santander-Chile, de quien era amigo cercano. Así, después de las Fiestas Patrias de ese año, ambos se reunieron en dependencias de la Casa Matriz del Banco, reuniéndose con don Andrés Oscar Heusser Risopatrón, Gerente de la División Empresas. Señala que la actitud de ambos hacía presumir una estrecha amistad. A continuación, el ejecutivo le indicó que había revisado sus buenos antecedentes, así como tener conocimiento de su proyecto inmobiliario en Independencia, ofreciéndole reestructurar la operación de financiamiento, realizando todas las gestiones necesarias para obtener las mejores condiciones. Le aseguró que no habría inconvenientes pues se encontraba dentro del marco de su competencia en el Banco.

Sostiene que la familiaridad entre estas personas le generó la confianza suficiente para aceptar la propuesta que le hacían, a lo que se añade que si bien él contaba con un amplio patrimonio, siendo dueño de 20 departamentos del Edificio Hipódromo I, a causa de este mismo proyecto no tenía liquidez suficiente para invertir, producto de una deuda de \$350.000.000.- con el Banco de Desarrollo, sin tener interés en venderlos ya que por diversas obras en las inmediaciones, éstos aumentarían de valor.

Señala que la propuesta que recibió de don Andrés Heusser consistía en que el Banco Santander-Chile pagara al Banco del Desarrollo el monto total de la deuda, y por el saldo de \$510.000.000.-, le prestarían un 80% como capital de trabajo, dejando como garantía los departamentos. Asimismo, los dividendos del capital serían pagados con los



**Foja: 1**

arriendos de los mismos. La condición exigida para otorgar este crédito, era que avalara a don Julio Lacámara Zulueta en una renegociación con el Banco por una deuda de \$24.726.522.- de la empresa Consorcio Gastronómico Ltda. Explica que don Julio Lacámara necesitaba rescatar dos vales vista por un total de \$30.000.000.- que tenía en garantía en el Banco y que estaban próximos a vencer, y con los cuales el acreedor se pagaría la deuda. Para su devolución, el Banco le exigía un avalista.

Aduce que le pareció lógico aceptar, toda vez que iba a avalar una deuda precisa y determinada del señor Lacámara, quien se comprometía a pagar las 60 cuotas puntualmente. Asimismo, la participación del señor Heusser era garantía de seriedad y un excelente contacto a futuro para acceder a otros créditos.

Indica que en octubre del mismo año, se reunió con el señor Lacámara, la Subgerente del Departamento de Riesgos del Banco, doña Helga Hadler Barrera, y con el ejecutivo de cuentas don Antonio Mancilla Maldonado, a fin de evaluar la operación que él avalaría. Allí se le indicó el monto de la deuda, y se le calificó favorablemente por lo que se evaluarían los antecedentes, pese al mal estado de los negocios del deudor. Por ello el señor Lacámara llamó por teléfono al señor Heusser, quien a su vez se comunicó con el actor, a fin de que no desistiera de avalar la deuda, pues iba a perder una oportunidad única de obtener liquidez en forma rápida.

Finalmente, en noviembre de 2008, concurre con el señor Lacámara a la sucursal de Avenida Las Condes N° 11090, siendo atendidos por los ejecutivos, señores Francisco Javier Scaff Vega, Ricardo Andrés Galliano Undurraga y Rodrigo Ignacio Urresty Vargas, firmando ante ellos el pagaré y la solicitud de crédito por \$24.726.522.-, quedando pendiente la discusión del plazo y la tasa, pero dejando establecido que las cuotas a pagar serían de \$720.000.-

Refiere que a fines de ese mes, el señor Scaff lo llamó para decirle que el pagaré se había “echado a perder”, por lo que pedía su firma para uno nuevo, a lo cual accedió de buena fe. Acto seguido, se comunicó con el señor Lacámara, quien indicó estar al tanto, a lo cual, el demandante le hizo presente que el pagaré sería por el monto estipulado, frente a lo cual éste le dijo que el señor Scaff y su equipo eran personas confiables, por lo que no había de qué preocuparse. Conforme a ello, a las 17 horas de ese día, un enviado del agente acudió a su casa y le entregó una hoja de oficio en blanco, señalándole que ahí debía firmar, notando que no se indicaba el monto adeudado ni se acompañó la solicitud de crédito correspondiente. Sin embargo, no dudó del señor Scaff ni de la credibilidad y seriedad del Banco.

Señala que a fines de febrero de 2009, mientras vacacionaba en Viña del Mar, recibió una llamada del señor Scaff, quien debía hablar personalmente con él en forma urgente, por lo que viajó de inmediato a Santiago. En esa reunión, el agente del Banco le indicó que el señor Lacámara no pagó las dos primeras cuotas, por lo cual él debía pagarlas antes del vencimiento de la tercera o sería enviado a DICOM. Él estuvo dispuesto a pagar de inmediato, y allí descubrió que la deuda ascendía a \$3.888.000.- Ante su sorpresa por esta discordancia en la suma adeudada, respondió que el segundo pagaré fue llenado por la suma de \$60.750.000.-, lo que corresponde al total de las deudas que el señor Lacámara, su cónyuge y sus empresas mantenían con el Banco Santander-Chile. Ante ello exigió al señor Scaff le exhibiera los pagarés, pero éste se negó, aduciendo que el primero había sido destruido y que el segundo sólo podía mostrárselo al deudor. Confrontándolo acerca del cambio de condiciones, el agente se negó a dar mayor información y exigió el pago bajo amenaza de enviarlo al Boletín Comercial. En vista de lo ocurrido llamó al señor Lacámara, quien concurrió minutos después, discutiendo con el señor Scaff respecto al monto del pagaré.



Foja: 1

El 9 de marzo de 2009, afirma haberse reunido con el señor Heusser, dejándolo al tanto de lo ocurrido. Luego de escucharlo, el gerente imprimió un informe de situación financiera de Consorcio Gastronómico Ltda. Al principio, intentó poner en duda lo que él le refirió, sugiriendo una confusión del demandante respecto al monto de la deuda, pero al exhibirle un papel con la cifra original escrita por el señor Lacámara, cambió de actitud, manifestando que resolvería la situación dentro de quince días, comprometiéndose a no publicar la morosidad en DICOM y sacándolo de la condición de avalista del señor Lacámara, lo que resulta inusual en la industria bancaria y que se vincula directamente con los perjuicios que alega.

Sostiene que el 26 de marzo de 2009, habiendo sido publicado como moroso, se le otorgó una constancia en que se señalaba que no apareció avalando a Consorcio Gastronómico Limitada. Indica que el señor Heusser le manifestó que su situación con el Banco se encontraba regularizada y que no habría represalias en su contra. Asimismo, señaló que se encontraba gestionando los créditos, lo que no se concretó pues no hubo intención de hacerlo. En la misma fecha, se le entregó otra constancia, extendida por los señores Scaff y Maldonado, en la que se indica que mantenía un crédito hipotecario pre aprobado por 7.500 Unidades de Fomento.

El 1 de abril de 2009, personal de la sucursal Las Condes del Banco Santander-Chile le informó que la solicitud de crédito por más de \$40.000.000.- tramitada por Arcomin Ltda., de propiedad de su entonces cónyuge, doña Olga Ximena Cornejo Toledo, había sido rechazada, sin manifestación de causa. Ese día volvió a comunicarse por correo electrónico con el señor Heusser, quien se encontraba en el extranjero, recibiendo respuesta el 8 de abril de 2009, quien le señala que pese a hacer todos los esfuerzos no consiguió la autorización del Banco, atendido el incidente ocurrido, lo que habría “herido a varias personas”. Sostiene que de ello se desprende que su decisión de pedir que se le borrara de DICOM y se eliminara el aval al señor Lacámara molestó a varias personas del Banco, las que idearon represalias en su contra.

Paralelamente, señala que en aquel entonces gestionaba dos créditos en el Banco Security: un crédito hipotecario por 6.000 Unidades de Fomento y el segundo para capital de trabajo por \$120.000.000.- a través de Arcomin Limitada, según da cuenta el correo enviado el 16 de febrero por la ejecutiva doña María Soledad Ragga Montenegro, requiriendo información para la obtención de dichos créditos. El 27 de abril de 2009, la misma ejecutiva le informa que por figurar moroso por \$3.888.000.-, el Banco Security rechazaba otorgar ambos créditos, suma que corresponde a la deuda de Lacámara. Ante ello, pidió al señor Scaff le aclarara la situación a la ejecutiva de Banco Security, quien envió un correo ese día dando a conocer que la morosidad informada por SINACOFI había sido refinanciada y que él ya no era avalista del deudor. Sostiene que ello demuestra que no era efectivo lo afirmado por el señor Heusser, pues en marzo de 2009 apareció en SINACOFI y DICOM por la deuda avalada al señor Lacámara, por lo que volvió a hablar con él, quien se comprometió a eliminarlo, lo que hizo.

Señala que el mes de abril, fue publicado nuevamente en DICOM por la suma de \$1.000.-, por un saldo impago de la tarjeta de crédito cerrada el 2006, hecho que nunca se le informó, puesto que la deuda nunca existió ni menos fue publicada en DICOM, como además se comprueba del hecho que tanto este Banco como otras entidades financieras le habían otorgado créditos y constancias favorables. Producto de esta publicación, el Banco del Desarrollo dio por finiquitado el crédito de Inversiones Vorend Chile Limitada por \$1.000.000.000.-, pese a que estaba al día en el pago, y existiendo un saldo insoluto sólo de \$250.000.000.-

Agrega que el año 2010 interpuso querrela criminal ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de los señores Francisco Javier Scaff Vega, Ricardo



**Foja: 1**

Andrés Galiano Undurraga y Oscar Andrés Heusser Risopatrón. Sin embargo, el Fiscal a cargo de la causa estimó que no hubo delito, solicitando el sobreseimiento definitivo, lo que fue acogido. A pesar de ello, durante la investigación apercibió al agente de la sucursal Las Condes a acompañar toda la documentación relativa al segundo pagaré, logrando descubrir antecedentes que demuestran que personas del Banco asociadas al señor Lacámara elaboraron un plan en beneficio de éste y del Banco, en desmedro del demandante. Entre estos documentos, se encontraban las cartas que el señor Lacámara envió al Banco solicitando la devolución de los vales vista y el mandato otorgado a la institución para emitir vales vista nominativos y proceder al pago de las deudas por línea y tarjeta de crédito, ascendentes a \$1.000.000.- y \$9.859.028.- respectivamente; todos datados el mismo día de suscripción del segundo pagaré, además de las solicitudes de cierre de productos de Consorcio Gastronómico Ltda. y Alimenza S.A. del 28 de noviembre de 2008. Asimismo, se incluye la solicitud de crédito del 27 de noviembre de 2008, en la que se enmendó el monto con corrector. Al final del documento aparece la firma del deudor y escritas a mano, las deudas que fueron incluidas por el Banco, arribando a la suma de \$60.750.000.- De lo anterior se infiere que correspondía a la solicitud de crédito original, pero como se destruyó el primer pagaré, optaron por asociarlo al segundo pagaré, colocándole a ambos documentos la misma fecha. Igualmente accedió a las declaraciones de los involucrados, siendo la del señor Heusser absolutamente falsa y desmentida por lo que declaró el señor Lacámara, quien si bien niega el monto inicial a avalar, reconoce el abuso cometido por el Banco. En cuanto a lo declarado por los señores Scaff y Galiano, son prácticamente idénticas, lo que demuestra que fue acordada y estudiada previamente.

Frente a los hechos, señala que reclamó por escrito a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la que pidió informe al Banco, el cual se evacuó el 7 de octubre de 2009 por doña Lya Margarita Macaya Contreras, reconociendo que el actor firmó dos pagarés y que el primero fue enmendado por lo que debió ser destruido. En cuanto a la deuda de \$1.000.-, ésta sería responsabilidad del Banco.

A su vez, en el marco de una querrela presentada ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 15729-2011, por el delito de falsificación de instrumento privado mercantil, declaró el señor Urresty, quien reconoce la existencia de dos pagarés, afirmando haber estado presente en la suscripción del primero, y que éste sería por aproximadamente \$24.000.000.- Reconoció haber llenado sólo la primera hoja de la solicitud de crédito, a excepción del monto, y señalando que la enmendadura cuenta con firma y timbre del señor Scaff. También consideró extraño que se hayan incluido todas las deudas del cliente, empresas y cónyuge, y que no entiende cómo se arribó al segundo monto. Asimismo, indicó que el señor Scaff le ordenó apurar la negociación porque el señor Lacámara era amigo del señor Heusser.

Refiere que una vez firmado el segundo pagaré, el señor Lacámara recuperó los vales vista, dinero que usó para ingresar a Comercial Goycolea Limitada, empresa vinculada en negocios ilícitos relacionados con cobre robado, con vinculación estrecha al caso Nolli, por el cual fue formalizado. Por lo tanto, estima que era dable suponer que el señor Lacámara nunca tuvo intención de cumplir con el pago de las cuotas del pagaré.

De la declaración del señor Scaff ante la Fiscalía, se infiere las motivaciones del Banco para participar en estos hechos, se debe a que la deuda iba a pasar a cartera vencida, frente a lo cual la sucursal debe cumplir metas comerciales y de mora. Así, se evitaba la provisión de fondos exigida por la Superintendencia del ramo, sumas que habrían tenido que excluirse de las utilidades del ejercicio. Mientras tanto, el señor Lacámara se beneficiaba recuperando los vales vista, a lo cual pudo acceder gracias al buen predictor del demandante en el sistema financiero. A su vez, el actuar del



**Foja: 1**

demandado excluyó al actor del mercado de créditos que le permitían desarrollar su actividad, en represalia por haber reclamado fundadamente contra la operación orquestada por el Banco.

Reitera que hasta marzo de 2009 fue un empresario exitoso. Explica que su familia se dedica a la misma actividad, mientras que él ha desarrollado diversos negocios desde la década de 1970, los que detalla en su presentación, por los que gozaba de prestigio, producto de un excelente comportamiento comercial y financiero, todo lo cual perdió producto del actuar doloso o a lo menos negligente del demandado. Así, al publicar morosidades inexistentes a su nombre, se produjo un daño a su imagen y reputación empresarial y personal. A causa de ello, no sólo el demandado, sino también otros Bancos negaron otorgarle créditos que ya estaban comprometidos. Posteriormente, el Banco del Desarrollo dejó de trabajar con él y solicitó la quiebra de su empresa Inmobiliaria La Troya Limitada, por el sólo hecho de haber sido publicado en DICOM por una deuda de \$1.000.- Toda esta situación además provocó su divorcio, debido al cambio de vida que enfrentó la familia, además de la angustia de la situación que debieron enfrentar.

En cuanto al derecho, señala que los hechos reseñados son actos injustos cometidos por el demandado en perjuicio del demandante, son que existan causales que justifiquen su actuar dañoso. Al respecto, sostiene que el demandado, a través de sus trabajadores y representantes, en el ámbito de sus funciones, actuaron no sólo con indiferencia respecto de los daños que le podrían causar, sino además con la voluntad de causarle perjuicios, por lo que habría dolo o a lo menos culpa grave, debiendo por ello responder por todos los perjuicios causados.

Asimismo, aduce que la empresa debe responder como causante del daño, por tratarse de trabajadores dependientes del Banco, recayendo sobre el Banco la responsabilidad extracontractual por el hecho propio de acuerdo a los artículos 2314 y 2329 del Código Civil. Asimismo, la ley establece la responsabilidad por el hecho ajeno por la actuación de sus dependientes, de conformidad al artículo 2320, sin perjuicio del derecho posterior del Banco de repetir contra ellos.

Afirma que la actuación del Banco, constituye un abuso de derecho, pues no hay justificación a la publicación tardía de la aparente mora, tanto por el tiempo transcurrido desde su exigibilidad como por su cuantía; persiguiendo la única finalidad de perjudicarlo.

A continuación hace referencia al principio de reparación integral de los daños y cita el artículo 1437 del Código Civil.

Como daño emergente, alega la pérdida efectiva de Inmobiliaria La Troya Limitada, la cual fue en definitiva declarada en quiebra, así como de los activos de la sociedad, los que fueron liquidados en el proceso, y la venta de otros bienes de su patrimonio, los que fueron vendidos a vil precio dada la necesidad a la que se vio enfrentado, todo lo cual asciende a \$520.000.000.-

Por concepto de lucro cesante, reclama la suma de \$55.000.000.-, por las rentas anuales que dejó de percibir desde abril de 2009 a la fecha de presentación de la demanda, correspondiente a la diferencia entre el promedio de los tres años anteriores a la comisión de los hechos y lo percibido desde el 2009 a la fecha de interposición del libelo. Adicionalmente, el Proyecto Habitacional Hipódromo I de la comuna de Independencia, el que concluyó exitosamente y que estaba en plena etapa de venta, teniendo proyectada una utilidad de \$600.000.000.- Afirma que de haber culminado el proyecto con normalidad, era su intención volver a invertir en la construcción de un



**Foja: 1**

proyecto idéntico, que generaría las mismas utilidades, de modo tal que en los años 2010 a 2012, habría reportado ganancias de \$1.800.000.000.-

En relación al daño moral, reclama la lesión a su imagen, prestigio y reputación empresarial y personal, la sensación de impotencia frente a los abusos, la frustración ante la privación de las expectativas razonables de bienestar económico para él y su familia, la angustia producto de los procesos judiciales que ha enfrentado, en las que ha ido perdiendo su patrimonio adquirido con años de esfuerzo, la frustración por los proyectos fracasados, y privación del disfrute de la actividad empresarial, a lo que está ligado por su familia y cultura. Asimismo, menciona el hecho de dejar de ser sostén de su familia y el quiebre que enfrentó a causa de ello. Hace presente también el desgaste de la investigación y recopilación de antecedentes para descubrir lo ocurrido. También estima que el demandado no puede permitir esta clase de conductas a sus dependientes, además del deber de establecer una adecuada política de selección de personal. Por ello, avalúa el daño moral en \$1.000.000.000.000.-

Insiste en que el Banco tenía perfecto conocimiento de las consecuencias que conlleva la inclusión de un deudor en un registro público de morosidad, pese a lo cual decidió hacerlo a fin de perjudicarlo, especialmente considerando el llamado “DICOM Histórico”, por cuanto existe archivo del registro en que figuraba moroso, antecedentes que son considerados por las entidades financieras al momento de otorgar un crédito.

Respecto a los elementos de la responsabilidad extracontractual, en cuanto al hecho imputable, alega que el demandado publicó en varias oportunidades sus antecedentes como moroso de un crédito, pues aunque se ignora el nombre de quien gestionó las publicaciones, se configura la responsabilidad en la organización de la empresa. Aun si se estima que no hay responsabilidad por el hecho propio, se aplica igualmente la responsabilidad por el hecho ajeno. En cuanto al dolo o culpa, reitera lo antes señalado. Por ende, corresponde la indemnización de los perjuicios causados.

Previas citas legales, solicita se tenga por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario, en contra de Banco Santander-Chile, a fin de que se le condene al pago de \$3.375.000.000.- o la suma que el tribunal determine en justicia y equidad, a título de indemnización de perjuicios por los daños ocasionados a causa de los hechos ilícitos descritos en su presentación.

A fojas 32, se tiene por interpuesta demanda en juicio ordinario de mayor cuantía, otorgando el respectivo traslado a la parte demandada.

A fojas, 33, consta notificación personal a don Claudio Bruno Melandri Hinojosa, en representación del Banco Santander.

Previo rechazo de las excepciones dilatorias, a fojas 65, comparece don Tomás Mackenney Bertrán, abogado, en representación de Banco Santander-Chile, quien contesta la demanda de autos, solicitando su rechazo, con costas.

En primer lugar, niega cualquier actuar delictual en relación a la adulteración del pagaré, por lo que el demandante firmó el pagaré con plena conciencia de la deuda que avalaba, según se confirma de los procedimientos penales iniciados por el actor.

Relata que el primer proceso penal se inició por el delito de abuso de firma en blanco, interpuesta el 27 de abril de 2010 por los mismos hechos e involucrados mencionados en este juicio, ampliada el 15 de octubre contra don Julio Lacámara Zulueta. Todas las declaraciones ante la Fiscalía darían cuenta de la falsedad de los fundamentos de la acción deducida. Así, el señor Lacámara declara que el monto a avalar era de aproximadamente \$60.000.000.-, y que se contactó con don Atilio Chávez, empleado del demandante, informándole los detalles de la operación bancaria.



Foja: 1

Por su parte, el señor Heusser reconoce la existencia de la reunión con el demandante y el señor Lacámara, pero indica que la conversación se limitó a discutir las posibilidades de financiamiento del proyecto inmobiliario del demandante en la comuna de Independencia, pues los referidos le habrían manifestado su intención de hacer negocios juntos. Sólo después habría sabido que el actor era avalista del señor Lacámara, quien se lo comentó. Cuando el demandante lo contactó en marzo de 2009, se puso al corriente de lo ocurrido, recomendado a su amigo repactar la deuda. En cuanto al correo enviado al demandante, aclara que sus dichos fueron sobredimensionados, reaccionando frente a la insistencia del actor para que se accediera a su solicitud de crédito, agregando que él no tiene incidencia en los comités de créditos y riesgos a cargo de aprobar tales operaciones. Ambas declaraciones son concordantes, en cuanto a que la reunión entre los tres sólo fue para analizar posibles operaciones a favor del señor Halabi.

Las demás declaraciones de funcionarios del Banco coinciden en que siempre se contempló que la deuda a avaluar era de aproximadamente \$60.000.000.- Igualmente, concuerdan en que la segunda renegociación del señor Lacámara se hizo conforme a las políticas generales adoptadas por el Banco. Acusa que el actor tergiversó las declaraciones, haciendo parecer que se referían a la primera operación del señor Lacámara con el Banco, avalada por el demandante, y no a la segunda, como ocurrió en realidad.

Agrega que tras la investigación, el fiscal adjunto solicitó a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, aprobación de la decisión de no perseverar en el procedimiento, por no aparecer antecedentes suficientes para fundar una acusación, lo que fue aprobado el 22 de noviembre de 2010. La audiencia correspondiente se realizó el 27 de diciembre de 2010. En dicha oportunidad, el querellante solicitó la reapertura de la investigación, lo que el Juzgado denegó, estimando además que no se configuraba delito, por lo que decretó el sobreseimiento total y definitivo. La apelación deducida por el querellante se declaró abandonada.

Frente a ello, interpuso una nueva querella por los delitos de estafa, falsificación de instrumento privado mercantil y obstrucción a la investigación, fundada en los mismos hechos, pero modificando sus aseveraciones respecto a tres hechos esenciales. En primer lugar, dijo haber firmado un pagaré que contenía el monto de \$24.726.522.-, mientras que en la primera querella dijo haberlo firmado en blanco. En segundo lugar, omitió señalar en la nueva querella que su decisión de ser avalista tenía como contrapartida obtener un 50% de la empresa CONGA. Por último, omitió indicar que no sufrió perjuicio patrimonial alguno, no sólo porque el pagaré se extendió por el monto exacto de la deuda, sino además porque el crédito fue dejado sin efecto y reemplazado por otro que el demandante no avaló. Tras hacerlo presente al fiscal a cargo y puesto al conocimiento del Juez de Garantía, éste decretó el sobreseimiento definitivo por existir cosa juzgada, condenando en costas al querellante. Este último apeló, oportunidad en que la sentencia fue confirmada.

En cuanto a los perjuicios respecto a la sociedad Arcomin Ltda., de propiedad de su cónyuge, niega que se deba al rechazo del crédito por parte del Banco, o a otro comportamiento de éste. Además, alega que el demandante carece de legitimidad activa para reclamarlo.

Respecto al rechazo de su crédito por el Banco del Desarrollo, afirma que es absurdo asociarlo a la publicación de la deuda de \$1.000.-, atendida la cuantía del crédito que se negociaba, lo que resulta absurdo.



Foja: 1

En relación al reclamo ante la Superintendencia de Bancos, explica que su representado contestó afirmando lo mismo que ha declarado en todas las instancias, esto es, que el pagaré se cursó por \$60.750.000.- Igualmente se indicó que el primer pagaré nunca se utilizó porque fue enmendado, siendo destruido, sustituyéndose por el pagaré que se acompañó, vigente hasta al 16 de marzo de 2009. También se señaló que la cuota con vencimiento el 9 de enero de 2009 no fue pagada a su vencimiento, originándose la morosidad publicada, lo que no se puede eliminar de conformidad a la normativa aplicable. En cuanto a la obligación de \$1.000.-, ésta fue cancelada sin exigir su pago, regularizándose la información remitida al Estado de Deudores de la Superintendencia. Teniendo en consideración lo anterior, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras explica en su resolución al reclamo del 4 de noviembre de 2009, que este ente debe mantener por ley la información refundida y permanente sobre los deudores, por lo que el Banco sólo le informó acerca de la existencia de una deuda vigente en el Estado de Deudores; y que las políticas de las instituciones financieras para actuar en materias crediticias, son de responsabilidad de su administración, sin que la Superintendencia tenga injerencia alguna.

Asimismo, declara que los perjuicios alegados no tienen relación alguna con la actuación del Banco, teniendo presente que el actor suma más de quince demandas, sólo en sede civil. Alude también a que uno de los inmuebles de propiedad de su empresa Vorend Chile Ltda., era utilizado como prostíbulo, cuestionando el supuesto comportamiento intachable de la demandante.

En cuanto al derecho, alega la prescripción de la acción deducida. Al respecto, señala que conforme a lo referido por el demandante, los supuestos ilícitos se habrían verificado en noviembre de 2008, en el caso de la suscripción del segundo pagaré; en abril de 2009, respecto a la publicación de la morosidad en el Estado de Deudas de la SBIF; y el 1 de abril de 2009, cuando se denegó el crédito a Arcomin Limitada. Teniendo presente que la demanda fue notificada el 17 de octubre de 2013, la acción se encontraría prescrita de conformidad al artículo 2332 del Código Civil.

Enseguida, opone excepción de cosa juzgada, fundada en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, basado en que en los dos procesos previos en sede penal no se pudo probar la existencia de hecho alguno, siendo aplicable lo dispuesto en el numeral 1º de la norma antes citada.

A continuación, reclama la falta de legitimidad activa, pues sostiene que la acción incoada es personal, siendo titular de la acción la víctima del daño, sus herederos o cesionarios, siendo además requisito esencial el daño, el cual debe ser significativo y alegado en la demanda. Sostiene que, en este caso, los supuestos daños recaen sobre personas distintas al actor, a saber, Arcomin Limitada, Sociedad Inmobiliaria La Troya Limitada, ni la sociedad a cargo del Proyecto habitacional Hipódromo I, comparecen al procedimiento de autos. Hace mención a que las personas jurídicas tienen vida propia en el derecho nacional, siendo personas distintas al demandante.

Asimismo, afirma que no se cumplen los requisitos de la responsabilidad extracontractual. Explica que no hay ningún ilícito civil, ni tampoco daños. Al respecto, señala que el pagaré no fue adulterado ni se abusó de la firma del actor, sino que éste lo suscribió libremente, asumiendo las obligaciones que contenía, según dan cuenta los sobreseimientos en materia penal y la respuesta de la SBIF. Acto seguido hace referencia a la obligación que tiene el Banco de informar a la Superintendencia respecto a los deudores, citando el artículo 14 de la Ley General de Bancos, de modo tal, que el comportamiento supuestamente ilícito es en realidad un deber legal para su representado. Agrega que denegar un crédito constituye una decisión libre y autónoma





**Foja: 1**

del Banco, que en ningún caso podría configurar un ilícito civil. Asimismo, corresponde a la contraria acreditar el dolo, el daño, y que éste sea indemnizable.

En cuanto a la responsabilidad por el hecho ajeno, no se cumplirían los requisitos copulativos necesarios: que el tercero dependiente cometa un ilícito civil, lo que exige a su vez una acción voluntaria, culpable o dolosa, existencia de daño y vinculación causal; existencia de relación de subordinación y dependencia al momento en que se produce el cuasidelito, y; actuar negligente del Banco en el control y vigilancia del dependiente.

Analizando el primer requisito, descarta que haya un hecho voluntario ilícito, reiterando los argumentos previamente expuestos. Respecto al dolo, sin perjuicio de que su prueba corresponde al demandante, descarta su existencia con el mérito de lo resuelto en los anteriores procesos judiciales y administrativos. En cuanto al vínculo causal, deberá probarse la relación de causa a efecto entre los comportamientos imputados y perjuicios alegados, así como probar que los daños son atribuibles normativamente a dichos comportamientos, lo que su parte descarta. Luego, estudia el elemento del daño, estimando que el daño alegado no puede ser considerado serio. En cuanto al daño emergente, postula que no hay razón para exigir al Banco reponer el patrimonio de la empresa declarada en quiebra, menos a una persona distinta de la sociedad. Acerca del lucro cesante, hace presente que debe calcularse según criterios objetivos y contar con cierto grado de certidumbre, de modo tal que son discutibles las alegaciones del actor respecto a este punto, máxime si la titularidad de la acción corresponde a la empresa que obtendría las utilidades y no al demandante. Finalmente, respecto al daño moral, indica que la cifre pedida es exorbitante y no se condice con las sumas otorgadas por los tribunales en casos de mayor entidad, sin perjuicio de que también deberá acreditarlo.

Concluye señalando que igualmente deberá probarse la falta de diligencia o cuidado al momento de elegir y controlar a los funcionarios que dolosamente habrían causado daños al actor, así como la relación de subordinación y dependencia al momento de los hechos, calificando la presente acción como un abuso grave al sistema judicial.

A fojas 109 se tuvo por contestada la demanda, confiriendo traslado para la réplica.

A fojas 111, el demandante evacúa la réplica, reitera en lo esencial los argumentos ya expuestos en su demanda, con las precisiones que se indican a continuación. Por una parte, puntualiza que la adulteración del pagaré no es un hecho fundante de la demanda, sino parte del contexto en que se perjudicó a su parte. En relación a la alusión de la contraria a la resolución de la SBIF, indica que lo que pretende en estos autos es que el demandado responda por sus actos, conforme a lo determinado por este organismo.

En cuanto a la prescripción, indica que el plazo debe contarse desde la producción del daño, momento en que surge la responsabilidad civil. Asimismo, tratándose de un daño continuado en el tiempo, el delito seguirá perpetrándose. Así, en el caso de marras, los daños sufridos han sido variados en el tiempo, y algunos continúan realizándose.

Respecto a la cosa juzgada, indica que no se cumple ninguno de los elementos de la triple identidad exigida, toda vez que las acciones penales se dirigieron contra personas naturales y no contra el Banco Santander-Chile, la causa de pedir fue la adulteración y uso de un instrumento mercantil y no los hechos dañosos y dolosos cometidos por el Banco, y la cosa pedida en dicha ocasión fueron las sanciones penales correspondientes; nada de lo cual resulta coincidente con las peticiones de autos.



«RIT»

Foja: 1

En relación a la falta de legitimidad activa, señala que lo que se reclama es el daño sufrido por don Luis Halabi Lorca, en su ánimo y patrimonio.

A fojas 122, se tiene por evacuada la réplica y se confiere traslado para la réplica.

A fojas 123, comparece el demandado evacuando la réplica, quien reitera en lo fundamental lo expuesto en su contestación, además de exponer que las afirmaciones contenidas en la réplica no hacen más que corroborar los argumentos de su parte.

Agrega, en cuanto a la prescripción, que en el caso de marras los supuestos daños son coetáneos a los hechos imputados como ilícitos, por lo que debe descartarse la defensa de la contraria.

En cuanto a la cosa juzgada, precisa que ésta recae sobre la imposibilidad de discutir nuevamente la responsabilidad de los hechos ya ventilados en sede civil, pues se tratan del mismo antecedente fáctico en que se funda la acción civil.

Hace presente que en caso de acreditarse los perjuicios sufridos, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, esto es, la reducción basada en la exposición imprudente al daño, toda vez que éste se generó por la mala administración del demandante.

A fojas 149 se tuvo por evacuada la réplica, y a fojas 151, se citó a audiencia de conciliación, la que resulta frustrada dada la inasistencia del demandado, según rola a fojas 155.

A fojas 168 se recibió la causa a prueba, fijando los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales ésta recayó.

A fojas 395, se citó a las partes a oír sentencia. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal dispuso como medidas para mejor resolver las diligencias periciales decretadas el 3 de mayo de 2016, a cargo de los peritos don Francisco Javier del Valle Herrera y doña Dangely María Torrejón Zepeda, encontrándose el primer informe en custodia N° 7780-2016, mientras el segundo rola a fojas 398.

Habiéndose efectuado las diligencias señaladas, se trajeron los autos para resolver.

#### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**Primero:** Que a fojas 1, comparece don Luis Enrique Halabi Lorca, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del Banco Santander-Chile, ambos ya individualizados.

Que las acciones han sido fundadas en las circunstancias de hecho y el derecho que ya fueran reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, los que se dan estrictamente por reproducidos para todos los efectos legales.

**Segundo:** Que, a fojas 65, comparece don Tomás Mackenney Bertrán, abogado, en representación del Banco Santander-Chile, quien contesta la demanda de autos, solicitado su rechazo íntegro, fundamentando sus alegaciones y defensas en los antecedentes de hecho y el derecho que ya fueran expuestos latamente en lo expositivo de esta sentencia, los que se dan expresamente por reproducidos para todos los efectos legales.

**Tercero:** Que las partes a fojas 111 y 123, se tuvieron por evacuados debidamente y dentro de los términos legales, los traslados que les fueron conferidos para la réplica y réplica de la demanda, a través de los cuales principalmente reiteraron y ratificaron sus pretensiones, argumentos y defensas ya esgrimidos por éstas en el presente juicio.



Foja: 1

**Cuarto:** Que el estatuto de responsabilidad aplicable a la acción que ha sido incoada, corresponde a aquel de carácter extracontractual, desde que lo que se persigue es la indemnización de perjuicios causados por la comisión de un delito o cuasidelito civil, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2314 y 2315 del Código Civil, y tramitada de conformidad a las normas del procedimiento ordinario, previstas en los artículos 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

**Quinto:** Que el derecho a la indemnización por daño moral que dicen haber sufrido los actores y cuyo reconocimiento demandan, debe determinarse con arreglo a las normas del derecho común. De esta manera, para determinar si procede o no declarar el derecho que se demanda, se requiere: a).- que el autor sea capaz de delito o cuasidelito; b).- que exista un hecho culposo o un cuasidelito propiamente tal, que sea imputable a la parte demandada; c).- que este hecho culposo haya causado un perjuicio o daño a la parte demandante; d).- que entre el hecho doloso o culposo y el perjuicio producido haya una relación de causalidad, esto es, que los daños o perjuicios sufridos por la víctima sean una consecuencia inmediata y directa de aquél.

**Sexto:** Que de acuerdo al mérito de las acciones y defensas esgrimidas por las partes en sus escritos del período de discusión, la litis quedó configurada de modo tal que las partes debieron allegar al proceso las probanzas correspondientes, a fin de acreditar los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos:

1. Efectividad de carecer el demandante de legitimación activa en la presente causa.
2. Época en que se hizo exigible la acción deducida en autos.
3. Efectividad de haberse interrumpido la prescripción de la acción deducida en autos: hechos y circunstancias.
4. Efectividad de existir la cosa juzgada alegada por la demandada.
5. Si la demandada incurrió en una acción u omisión dolosa o culpable.
6. Existencia de daños y perjuicios ocasionados al demandante. En la afirmativa, monto y naturaleza de los mismos.
7. Existencia de un vínculo de causalidad entre la acción u omisión descrita y los daños acontecidos al demandante.

**Séptimo:** Que a fin de acreditar sus alegaciones, el demandante rindió la siguiente prueba instrumental: 1) Certificado de matrimonio entre don Luis Enrique Halabi Lorca y doña Olga Ximena Cornejo Toledo; 2) Copia autorizada de lo obrado en causa RIT 2420-2011, del 2º Juzgado de Familia de San Miguel; 3) Certificados de nacimiento de doña Dominic Michele Halabi Cornejo y doña Daniella Alexandra Halabi Cornejo; 4) Carta manuscrita suscrita por don Luis Halabi de fecha 15 de junio de 2009; 5) Informe comercial DICOM de don Luis Enrique Halabi Lorca; 6) Correos electrónicos intercambiados en abril de 2009 por don Andrés Heusser Risopatrón y el demandante; 7) Copia de inscripción de fojas 29127 N° 21633 del Registro de Comercio de Santiago del año 2004; 8) Copia de inscripción de fojas 9259 N° 6056 del Registro de Comercio de Santiago del año 2009; 9) Documento “Histórico Colocación Sistema” a nombre del actor; 10) Informes de deudas N° 923361 y 667532 del demandante, emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; 11) Informe de deudas N° 667533 de Inmobiliaria La Troya Limitada, emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; 12) Copia legalizada de constancia de crédito preaprobado otorgada por Banco Santander Santiago del 26 de marzo de 2009; 13) Constancia de no avalar deuda otorgada por Banco Santander Santiago del 26 de marzo de 2009; 14) Tarjetas de presentación de los señores Francisco Scaff Vega, Ricardo



## «RIT»

### Foja: 1

Galliano Undurraga, Aldo Maldonado Rebolledo, Sandra Delgado Catalán, Andrés Heusser Risopatrón, Helga Hadler Barrera, Antonio Mancilla Maldonado; 15) Correo electrónico de fecha 9 de octubre de 2009, enviado por doña Angela Jofré Meza; 16) Carta respuesta N° 1720 del 29 de enero de 2008, del Banco Central de Chile; 17) Certificado de Banco Security sobre crédito de doña Olga Ximena Cornejo Toledo, del 29 de abril de 2009; 18) Constancia de solicitud de crédito de Banco Security del 29 de abril de 2009; 19) Copia legalizada de correo electrónico enviado por don Francisco Scaff a doña María Soledad Ragga el 27 de abril de 2009; 20) Correo electrónico enviado por don Juan Carlos Valdés Aburto del 17 de junio de 2009; 21) Copia legalizada de declaración policial voluntaria de don Rodrigo Ignacio Urresty Vargas del 11 de abril de 2012; 22) Copia de solicitud de crédito de Consorcio Gastronómico Limitada ante el Banco Santiago del 27 de noviembre de 2008; 23) Carta respuesta a SBIF de Banco Santander, de fecha 7 de octubre de 2009; 24) Copia de escritura pública de mandato judicial otorgado a don Alexis Javier Volosky Ferrand.

Asimismo, a fojas 320 se llevó a cabo audiencia de exhibición de documentos solicitada por su parte, por medio de la cual, la contraria acompañó: a) copia de solicitud de crédito al Banco Santander Santiago de Consorcio Gastronómico Limitada del 16 de marzo de 2009; b) copia de pagaré suscrito el 16 de marzo de 2009 a nombre de Consorcio Gastronómico Limitada por \$60.750.000.-, avalado por el señor Lacámara y la señora Beltramin a favor de Banco Santander-Chile; c) Comprobante de otorgamiento de crédito a Consorcio Gastronómico Limitada; d) Comprobante de cancelación total anticipada de operación N° 00350000420009268080; e) Constancia del Banco Santander Santiago de no avalar deuda de fecha 26 de marzo de 2009.

A su requerimiento, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras informó que el actor registra deudas en el Estado de Deudores que mantiene este organismo. También pidió que se oficiara a la Cámara de Comercio de Santiago, institución que acompañó Boletín Comercial del demandante.

Igualmente, solicitó prueba pericial a fojas 192 y 193, los que además fueron decretados como medidas para mejor resolver, rolando a fojas 298 el informe pericial de la perito psicóloga doña Dangely Torrejón Zepeda, y en custodia N° 7778-2016, el informe pericial del perito contador don Francisco Javier del Valle Herrera.

**Octavo:** Que, a su turno, la parte demandada aportó la siguiente prueba documental: 1) Copias de escrituras públicas en que constan mandatos judiciales otorgados a don José Ignacio Cuesta Ezquerria y don Eugenio Andrés Labarca Birke; 2) Copia de piezas de causa RIT 4753-2010 del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, incluyendo querella, ampliación de querella, acta de audiencia de comunicación de no perseverar en el procedimiento y sentencia de segunda instancia; 3) Copia de piezas de causa RIT 14637-2011 del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, incluyendo querella, acta de audiencia de sobreseimiento y sentencia de segunda instancia; 4) Copia de declaraciones por causa RUC 1010010203-5 ante la Fiscalía de Las Condes de don Francisco Javier Scaff Vega, Ricardo Andrés Galliano Undurraga, Andrés Oscar Heusser Risopatrón, Julio Lacámara Zulueta; 5) Copia de declaración por causa RUC 1110036175-4; 6) Copia de solicitudes de crédito de Consorcio Gastronómico Limitada ante el Banco Santiago del 27 de noviembre de 2008 y 16 de marzo de 2009; 7) Copia de pagaré suscrito el 27 de noviembre de 2008 a nombre de Consorcio Gastronómico Limitada por \$60.750.000.-, avalado por los señores Lacámara y Halabi, a favor de Banco Santander-Chile; 8) Copia de pagaré suscrito el 16 de marzo de 2009 a nombre de Consorcio Gastronómico Limitada por \$60.750.000.-, avalado por el señor Lacámara y la señora Beltramin, a favor de Banco Santander-Chile; 9) Copia de constancia de no avalar deuda otorgada por Banco Santander Santiago del 26 de marzo de 2009; 10)



**Foja: 1**

Copia de demandas en causas rol N° 19831-2010 del 13° Juzgado Civil de Santiago, N° 14646-2011 del 25° Juzgado Civil de Santiago y N° 14928-2011 del 13° Juzgado Civil de Santiago.

Adicionalmente, a su requerimiento, se ofició a la Fiscalía de Las Condes, la que remitió copia digital de las investigaciones RUC 1110036175-4 y 1010010203-5, guardado en custodia N° 13848-2013; y a la Cámara de Comercio de Santiago, institución que acompañó Boletín Comercial del demandante.

**Noveno:** Que conforme al principio de economía procesal y a fin de evitar dilaciones y desgaste innecesario de la actividad jurisdiccional, se procederá a revisar y fallar primeramente la excepción de prescripción deducida por la parte demandada en contra de la acción interpuesta en autos, en conformidad a las reglas de derecho común aplicables en la especie, de acuerdo a lo señalado en considerando anteriores.

**Décimo:** Que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones.

**Undécimo:** Que de acuerdo a lo anterior, en la especie resulta plenamente aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto.

**Duodécimo:** Que según se desprende de las aseveraciones del demandante durante la etapa de discusión, los hechos que motivan la presente acción de responsabilidad extracontractual impetrada en contra del Banco Santander-Chile consisten en la circunstancia de haberse publicado las siguientes deudas en los registros financieros:

- 1) Las dos primeras cuotas morosas del pagaré que habría suscrito como avalista de las obligaciones de don Julio Lacámara Zulueta ante el Banco Santander-Chile, lo que se publicó en febrero de 2009.
- 2) Una deuda del actor con Banco Santander-Chile, correspondiente a saldo deudor tras cierre de tarjeta Mastercard el año 2006, ascendente a \$1.000.-, publicada en marzo y abril de 2009.

Que de los documentos acompañados por las partes, consta que el primer crédito corresponde en realidad a pagaré adeudado por la sociedad Consorcio Gastronómico Limitada, cuyo representante legal era don Julio Lacámara Zulueta.

Que, asimismo, la existencia de las publicaciones señaladas consta del documento de colocación histórica agregado a fojas 253.

**Décimo tercero:** Que el demandante atribuye a dichas publicaciones diversos daños de orden patrimonial y moral, originados por la pérdida de su buena reputación financiera y comercial, impidiéndole acceder a créditos bancarios, lo que habría provocado la quiebra de su sociedad Inmobiliaria La Troya Limitada, la pérdida de las utilidades esperadas de su proyecto inmobiliario, así como la afectación a su imagen, frustración de expectativas de buena vida, angustias por el proceso vivido y sus consecuencias a nivel familiar, entre otros.

**Décimo cuarto:** Que en materia de responsabilidad extracontractual, el plazo de prescripción se encuentra expresamente determinado en el artículo 2332 del Código Civil, debiendo contarse a partir de la perpetración del acto.



Foja: 1

Que la réplica del actor viene a reafirmar que los hechos imputados al demandado ocurrieron durante los primeros meses del año 2009, según se consigna en el considerando duodécimo.

Que la demanda fue notificada al Banco Santander-Chile el 17 de octubre de 2013; por consiguiente, entre la fecha de perpetración de los actos en que ella se basa y aquélla en que se cumplió dicho trámite procesal transcurrió en exceso el plazo a que se refiere el precepto antes citado, de lo que se concluye que la acción se encuentra prescrita.

**Décimo quinto:** Que la defensa a la excepción de prescripción por parte del demandante, se ha basado en que el plazo debe computarse a partir de la aparición del daño.

Que frente a ello habrá de tenerse presente las reglas de interpretación que establece la propia legislación en el artículo 19 inciso primero del Código Civil, norma aplicable en la especie, toda vez que el tenor literal del artículo 2332 ya referido resulta absolutamente claro en sus términos.

**Décimo sexto:** Que resulta efectivo que en ciertos casos entre la perpetración del acto y la aparición del daño puede transcurrir un tiempo considerable, de modo tal que al tiempo de evidenciarse los perjuicios pudo haber transcurrido sin interrupciones el plazo de prescripción. Sin embargo, para ello el legislador ha establecido normas especiales de prescripción, tal como ocurre, por ejemplo, en materia medioambiental, en que el artículo 63 de la Ley N° 19.300 establece que el plazo deberá contarse desde la manifestación evidente del daño; cuyo no es el caso de autos.

**Décimo séptimo:** Que, sin perjuicio de lo anterior, aun en caso de aceptar la teoría propuesta por el demandante, lo cierto es que de acuerdo a los antecedentes aportados por las partes y a los propios dichos del actor, los daños que atribuye al actuar del demandado se habrían comenzado a manifestar en forma prácticamente inmediata a la ocurrencia de los hechos. Así da cuenta una carta suscrita por don Luis Halabi y dirigida según se infiere a don Andrés Heuser, fechada el 15 de junio de 2009, acompañando el informe comercial de DICOM en que aparece con un predictor de 143, el que él califica en la comunicación como “pésimo”. Asimismo, el rechazo del crédito que tramitaba ante el Banco Santander-Chile se produjo en el mismo mes de abril de 2009, según consta de correo del 8 de abril de 2009, remitido por don Andrés Heusser Risopatrón. Por ende, considerando el tiempo de aparición estas primeras consecuencias perniciosas que tendrían como fundamento el actuar del demandado, la acción se encontraría de todos modos prescrita.

Que, en este orden de ideas, mal puede alegar que estuvo impedido de ejercer la presente acción civil con anterioridad, de modo tal que su argumentación, si bien puede ser atendible en otras circunstancias, en el caso de marras carece de todo sustento fáctico.

**Décimo octavo:** Que, asimismo, resulta absolutamente inadmisibile la defensa del actor, en cuanto afirma que el plazo de prescripción no ha transcurrido si los daños persisten en el tiempo, o si se siguen manifestando nuevos daños a futuro, pues bajo dicho entendido la acción sería, en la práctica, imprescriptible; lo que es del todo contrario al principio de seguridad jurídica y certeza que persigue esta institución. Cabe señalar que la imprescriptibilidad es además una situación excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico, siendo de derecho estricto, como ocurre respecto a los crímenes de lesa humanidad, de conformidad al artículo 40 de la Ley N° 20.357, y anteriormente, por aplicación del artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República.



«RIT»

Foja: 1

Que, en consecuencia, en el caso de marras, sin que se haya invocado una norma especial que faculte para ello, no hay razón alguna para alterar las reglas generales de prescripción establecidas en materia de responsabilidad civil extracontractual.

**Décimo noveno:** Que, así las cosas, y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con los artículos 2514 y 2518 inciso final, del mismo cuerpo legal, se advierte que la acción interpuesta en autos se encuentra prescrita, ya que el origen de los perjuicios cuyo resarcimiento se persigue emanan de los hechos ventilados entre febrero y abril de 2009, y la demanda fue legalmente notificada a la parte demandada recién el 17 de octubre de 2013, transcurriendo sobradamente el plazo fatal de cuatro años contemplado en la disposición antes invocada.

Que, a mayor abundamiento, el libelo fue interpuesto el 25 de septiembre de 2013, fecha en la que la acción incoada, conforme a lo expuesto previamente, ya se encontraba prescrita.

**Vigésimo:** Que, en consecuencia, deberá necesariamente desestimarse la demanda interpuesta por don Luis Enrique Halabi Lorca por encontrarse la acción interpuesta irremediablemente prescrita a la fecha de notificación de la demanda.

**Vigésimo primero:** Que se omitirá pronunciamiento respecto de las demás acciones, excepciones y defensas esgrimidas por las partes, por resultar del todo inoficioso.

**Vigésimo segundo:** Que las demás probanzas rendidas en nada alteran lo que se viene razonando.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1702, 2314 y siguientes, 2492 y siguientes y demás pertinentes del Código Civil; artículos 138, 160, 170, 254 y siguientes, 346, 384, 426 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

- I. Que se acoge la excepción de prescripción deducida por el Banco Santander-Chile.
- II. Que atendido lo anterior, se niega lugar a la demanda de indemnización de perjuicios en sede de responsabilidad extracontractual deducida por don Luis Enrique Halabi Lorca en contra del Banco Santander-Chile.
- III. Que se omite pronunciamiento respecto de las demás alegaciones de las partes, por resultar inoficioso su análisis.
- IV. Que se condena en costas al demandante, por haber resultado totalmente vencido en autos.

Egrésese, regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívense los antecedentes.

Rol N° 13848-2013.-

Pronunciada por doña Andrea Coppa Hermosilla, Juez Suplente del Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago.

Autoriza doña Margarita Bravo Narváez, Secretaria Subrogante.



«RIT»

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticuatro de Febrero de dos mil diecisiete**





NOMENCLATURA : 1. Complementa sentencia.  
JUZGADO : 23<sup>o</sup> Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-13848-2013  
CARATULADO : HALABI / BANCO SANTANDER

Santiago, veintinueve de Mayo de dos mil dieciocho

Dando cumplimiento a lo ordenado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, mediante resolución de fecha 12 de abril de 2018, la cual rola en el expediente a fojas 624, se complementa la sentencia dictada con fecha 24 de febrero de 2017, contenida en éstos autos a fojas 516 y siguientes, resultando necesario para ello modificar el texto de la misma en cuanto a los considerandos Vigésimo, Vigésimo primero y Vigésimo segundo, quedando éstos en la forma que a continuación se indica, además de incorporarse los siguientes:

**“Vigésimo:** Que, sin perjuicio de lo anterior, en lo relacionado con la excepción de cosa juzgada cabe tener presente lo señalado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que indica que “La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya:

1° Identidad legal de personas;

2° Identidad de la cosa pedida; y

3° Identidad de la causa de pedir. Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.”

Asimismo, el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, señala que “Las sentencias que absuelvan de la acusación o que ordenen el sobreseimiento definitivo, sólo producirán cosa juzgada en materia civil, cuando se funden en alguna de las circunstancias siguientes:

1ª La no existencia del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso. (...)

**Vigésimo primero:** Que, en virtud de lo anterior, y atendida la prueba documental rendida, consistente en las copias del expediente de la querrela criminal interpuesta con fecha 27 de abril de 2010 por el demandante en contra de Francisco Javier Scaff Vegas, Ricardo Galliano Undurraga y don Andrés Heusser Risopatrón ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, documental rendida oportunamente y no objetada legalmente, y lo señalado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, puede desprenderse que, en el caso de marras, no es posible acreditar la excepción de cosa juzgada, toda vez que el primer requisito, esto es, la identidad de personas, no se configura respecto de los querrellados en el proceso penal y el demandado de este proceso civil, en la medida en la que en la acción civil del caso sublite, el demandado resulta ser una persona jurídica distinta a las personas naturales respecto de las cuales fue dirigida la acción penal antes mencionada. En este mismo orden de ideas, debe entenderse que el artículo 179 del Código de Procedimiento civil, el cual permite la configuración de la cosa juzgada en sede civil, con circunstancias acaecidas en sede penal, debe interpretarse conjuntamente con lo señalado en el artículo 177 del código del ramo, en la medida en



la que dichas disposiciones establecen requisitos copulativos para alegar la excepción de cosa juzgada, debiendo analizar la configuración de los requisitos señalados en el artículo 179, con posterioridad al hecho de haberse configurado la triple identidad requerida por el artículo 177.

Así, y en virtud de lo anteriormente razonado, deberá desestimarse la excepción en comento.

**Vigésimo segundo:** Que, en relación con la excepción de falta de legitimación activa, cabe mencionar que del libelo de la demanda, y de los dichos del propio demandante, puede desprenderse que el demandante no ha especificado de qué forma se ha visto menoscabado en virtud del hecho dañino que imputa al banco demandado, toda vez que los daños que alega el sujeto activo habrían sido sufridos por personas jurídicas, específicamente las empresas Inmobiliaria La Troya Limitada y/o por la empresa Arcomin Limitada. En este sentido, indica que la primera empresa habría dejado de percibir los ingresos proyectados en relación con el proyecto habitacional Hipódromo I, y la segunda, se habría visto perjudicada toda vez que, como inclusión del demandante en el boletín comercial, se le habría denegado un crédito por aproximadamente \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos), personas jurídicas que no figuran como sujetos activos en la demanda de autos.

Asimismo, expresa simplemente que tendría participación en la empresa Inmobiliaria La Troya Limitada, pero no acredita dicha participación, no especifica los beneficios pecuniarios que percibía respecto de la misma, en el caso de ser efectiva dicha participación.

Sin perjuicio de lo anterior, la interposición de la acción deducida en autos encuentra la inconsistencia mencionada respecto de los daños materiales alegados por el sujeto activo, más no resulta igual situación respecto de los daños morales que el demandante imputa como consecuencias directas al actuar del banco demandado, toda vez que los mismos han sido vinculados específicamente a la vulneración directa de su imagen, buen nombre comercial o empresarial, reputación personal, impotencia sufrida por lo abusos cometidos, frustración respecto de razonables expectativas, entre otros motivos, lo que permite concluir que los daños extrapatrimoniales que alega han sido sufridos en forma efectiva por el demandante de autos. Así, en virtud de lo anterior, y en consideración con las pretensiones hechas valer en juicio, debe acogerse la excepción de legitimación activa respecto de la pretensión indemnizatoria, únicamente en lo relacionado con los daños patrimoniales demandados en autos, más no respecto de la pretensión que busca el resarcimiento del daño moral.

**Vigésimo tercero:** Que finalmente, en cuanto a la excepción de falta de configuración de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, tratándose del asunto de fondo sometido al conocimiento de este Tribunal, cabe consignar que respecto de la culpa de los funcionarios de Banco, el demandante alega que fue publicado improcedentemente en los registros de SINACOFI y DICOM en el mes de marzo del año 2009. En su relato, el demandante expone que el día 27 de abril de 2009, habría perdido oportunidades de crédito con el banco Security, debido a la publicación antes mencionada.

Ahora bien, de la prueba acompañada en autos, se desprende que el demandado habría sido publicado en febrero del año 2009 en los registros antes mencionados, y que sólo el 26 de marzo de 2009 el propio Banco demandado habría emitido una constancia, documento que fue acompañado oportunamente y que consta a fojas 260, en la cual se indica que el solicitante de la constancia, esto es, el señor Luis Halabi, no figuraba como aval de la empresa Consorcio Gastronómico. Así, expone el demandante que, con el



mérito de dicho documento, solicitó al ejecutivo del Banco Santander que aclara la situación de morosidad, por la deuda publicada en febrero de 2009. Al respecto, se acompaña email enviado por Francisco Scarff a María Soledad Ragga, quien fuera ejecutiva del Banco Security (tal como consta del documento acompañado oportunamente, y que consta a fojas 270 del expediente), email que fue enviado con fecha 27 de abril de 2009, acompañado oportunamente y que consta a fojas 271 del expediente. En dicho correo electrónico, el Gerente de la Sucursal de Las Condes de Banco Santander informa que el demandante de autos no mantenía, a la fecha de envío del email, deuda indirecta con el Banco Santander, y que la morosidad que aparece informada a través de SINACOFI febrero de 2009 fue refinanciada con fecha 26 de marzo de 2006, donde se destaca que el señor Halabi no se constituía como aval de dicha operación. Sin perjuicio de lo anterior, en email de Banco de Chile, de fecha 17 de junio de 2009, y de Banco Falabella, de fecha 9 de octubre de 2009, los cuales fueron acompañados oportunamente y constan a fojas 272 y 261 respectivamente, se desprende que, a dichas fechas, el demandante de autos, señor Luis Halabi, aún figuraba con una deuda indirecta del mes de febrero de 2009, lo que refleja un actuar negligente por parte de los funcionarios del Banco demandado, toda vez que, a pesar de haber eliminado de los registros propios al señor Halabi, como deudor de la entidad, no tomaron las medidas pertinentes a eliminarlo de los registros de SINACOFI y DICOM, por lo que es dable presumir a esta Magistratura, y por tanto, dar por acreditado, el elemento *culpa*, respecto de los funcionarios del Banco Santander, demandado de autos, a partir de los documentos aportados antes mencionados, emanados de terceros, y en virtud de las facultades concedidas a este Tribunal por el artículo 1712 del Código Civil, y artículos 341 n°6 y 426 del Código de Procedimiento Civil.

Que, sin embargo, conforme con la prueba rendida en autos, no es dable a esta Magistratura dar por acreditado el dolo de los agentes de la entidad jurídica demandada en estos autos, por lo que, conforme con lo señalado en el artículo 1698 del Código Civil, no habiendo el demandante rendido prueba suficiente, dicho factor de imputabilidad no podrá tenerse por acreditado.

**Vigésimo cuarto:** Que, habiéndose establecido el actuar negligente por parte de los funcionarios del Banco demandado, al haber eliminado de los registros propios al señor Halabi como deudor de la entidad, pero sin las medidas pertinentes para eliminarlo de los registros de SINACOFI y DICOM, y habiéndose establecido que sólo podrán analizarse en este proceso los daños que el demandante dice haber sufrido personalmente, cabe señalar que el actor, para efectos de acreditar el daño moral invocado, solicitó informe pericial, el cual se encuentra acompañado en autos a fojas 398 y siguientes, y fue elaborado por la psicóloga doña Dangely Torrejón Zepeda, mediante 3 entrevistas forenses con el peritado, realizadas los días 25, 29 y 31 de agosto de 2016, además de la lectura del expediente, visita domiciliaria, y aplicación de test proyectivo de personalidad (Rorcharch). En los resultados del peritaje, la perito señala que el demandante arrastra varias falencias afectivas de carácter histórico en virtud de los hechos vividos en su niñez, las cuales son más significativas que las falencias de carácter económico, ya que en éste ámbito no existían falencias. Expone, asimismo, que dichas falencias no habrían recibido tratamiento psicológico con anterioridad a la realización del peritaje. Señala además, que el éxito económico del demandante le permitía compensar sentimientos de soledad, desapego e inseguridad que se habrían instalado en su niñez y adolescencia. Indica que la pérdida del confort económico desencadena un derrumbamiento del resto de las áreas de su vida, esto es, sus relaciones personales, familiares y sociales, provocando un daño psicológico integral. Asimismo, agrega que el demandante es capaz de construir relaciones personales, pero presentando una actividad



afectiva más bien inmadura, susceptible, sugestionable, y en la actualidad, con síntomas de labilidad, esto es, precariedad e inestabilidad emocional.

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, el informe pericial señala que no se observan trastornos o dolencias psiquiátricas anteriores al momento de los hechos de esta causa, indicando que los antecedentes de la infancia compleja no habrían constituido trastornos para el demandante, por lo que detecta que el daño psicológico detectado es consecuencia de los hechos de la causa. Dichos daños se manifestarían en autoaislamiento, alteración del sueño, pérdida y alejamiento de vínculos afectivos, conducta obsesiva, alejamiento de espacios recreacionales que contribuyen a la integración social y salud mental, escaso control de emocionalidad, siendo actualmente lábil, susceptible y sugestionable, condiciones que aumentan su vulnerabilidad. Asimismo, menciona que los síntomas físicos y psicológicos han perdurado en el tiempo, y que actualmente sólo lo motiva la resolución y esclarecimiento de estos hechos, y recuperar el vínculo paterno-filial que ha perdido, todo lo cual se traduce en un cuadro depresivo angustioso de carácter reactivo. Por último, menciona que dicho cuadro se relaciona directamente con el conflicto financiero sobrevenido en esta causa, y es recomendable una intervención psiquiátrica que lo ayude a gestionar las consecuencias de la pérdida de su proyecto de vida.

**Vigésimo quinto:** Que así, y únicamente conforme al mérito del informe pericial de fojas 398 y siguientes, y lo señalado en el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, puede concluirse que existe un menoscabo de carácter extrapatrimonial sufrido en el demandante de autos, que se habría traducido en un estado depresivo angustioso de carácter reactivo y la pérdida de las relaciones personales, familiares y sociales del demandado, junto con los demás síntomas físicos y psicológicos mencionados en el considerando vigésimo cuarto, por lo que deberá tenerse por acreditado el daño extrapatrimonial demandado en autos.

**Vigésimo sexto:** Que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y del mismo informe pericial antes analizado se desprende que el peritado de autos arrastraba diversos problemas incubados en su niñez y adolescencia, y que, la pérdida de su estabilidad económica significó que los mismos resurgieran, dado que ninguno de ellos recibió el apropiado tratamiento durante la vida del demandante. En virtud de lo anterior, y, considerando estrictamente lo concluido por la psicóloga y perito doña Dangely Torrejón Zepeda, debe entenderse que la lesión de carácter extrapatrimonial se ha producido en forma efectiva en el demandante, sin embargo, además de la existencia de la lesión, para que sea procedente la indemnización solicitada, debe acreditarse que efectivamente la misma se debe directamente al actuar de la demandada de autos, lo que dice relación estricta con la acreditación del vínculo causal entre los dos elementos mencionados.

Así, la causalidad en su sentido naturalístico, determina si el hecho es una condición necesaria y directa para que el daño se haya producido. Lo anterior, se extrae a partir de lo señalado en diversas disposiciones del Código Civil, como el artículo 1558 del Código Civil, toda vez que el mismo expone que se “ (...) es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento”. Asimismo, el artículo 2314 establece que “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización (...)”, y el artículo 2329 señala “ (...) que todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta (...)”.

Ahora bien, la excelentísima Corte Suprema de Justicia ha señalado que " Que, con todo, la causalidad es una cuestión estrictamente de hecho en su primer aspecto -el



naturalístico-, esto es, entendido como condición necesaria de responsabilidad; pero la atribución normativa del daño al hecho ilícito (daño directo) encierra elementos y aspectos de derecho y, como tal, es susceptible de ser revisado por la Corte Suprema mediante el presente recurso de casación en el fondo" (fallo de casación dictado con fecha 26 de enero de 2004, caratulados Ariztía Comercial Ltda. con Banco Sudamericano, publicada en Gaceta Jurídica, N° 283, correspondiente al mes de enero del año 2004, pp. 121-137. Visto en Hugo A. Cárdenas - LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD: ¿QUAESTIO FACTI O QUAESTIO IURIS?, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, pp. 167 - 176 [2006], consultado con fecha de esta resolución en [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-34372006000100011#z](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100011#z)). Por su parte, la doctrina también ha indagado respecto del elemento *causalidad* del daño, estableciendo que en ocasiones, si bien el daño puede ser consecuencia directa y necesaria de un hecho, no resulta procedente establecer un vínculo de causalidad, dado que el elemento naturalístico se ve morigerado por un elemento normativo. Así, Rodrigo Barcia Lehmann señala que esta distinción entre el elemento naturalístico y el normativo ya ha sido planteada por Enrique Barros, en cuanto a que la causalidad suele tener dos funciones. En virtud de la primera, la causalidad relaciona el hecho con el daño en el ámbito empírico; en consideración a la segunda, se analiza si tal hecho fue el causante de los daños -que pueden o no ser concretos, dependiendo de la función del daño resulta imputable normativamente al victimario (visto en Rodrigo Barcia Lehmann – “Algunas Consideraciones De La Relación De Causalidad Material Y Jurídica En La Responsabilidad Civil Médica”, Pp. 88, en link <http://derecho.udp.cl/wp-content/uploads/2016/08/03.pdf>, visitado con fecha de esta resolución). Lo anterior significa que un análisis adecuado de la causalidad determina que, efectivamente, el daño pueda ser entendido como una consecuencia objetiva del hecho. Así, dentro de las teorías jurídicas de la causalidad, resalta la teoría de la causa adecuada establece que “(...) la relación entre la causa y el daño debe ser adecuada y, por ende, entre todas las causas necesarias se debe optar por aquella que, conforme al curso natural de las cosas, lleva hacia el resultado dañino. Por ello, para algunos la aplicación de esta teoría exige la formulación de "un juicio de probabilidad" para elegir la condición adecuada al daño” (visto en Rodrigo Barcia Lehmann – “Algunas Consideraciones De La Relación De Causalidad Material Y Jurídica En La Responsabilidad Civil Médica”, Pp. 94-95, en link <http://derecho.udp.cl/wp-content/uploads/2016/08/03.pdf>, visitado con fecha de esta resolución). Por su parte, el profesor Hugo Cárdenas señala que “La teoría de la causa adecuada no solo representa un avance desde un punto de vista técnico respecto de la teoría de la equivalencia de las condiciones, sino que también se adapta y logra explicar más fácilmente el nexo causal en un mundo mucho más tecnificado, en el que, además, parece darse un tránsito (en la identificación de la conducta jurídicamente relevante) desde la teoría de la acción humana hacia posturas funcionalistas como la de la "defraudación de las expectativas de confianza"<sup>21</sup>. Ciertamente, y como al respecto de esta teoría anota Le Torneau, "el carácter totalmente artificial y abstracto del examen retroactivo debería servir para no admitir esta teoría si no es con prudencia y circunspección" Visto en Hugo A. Cárdenas - LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD: ¿QUAESTIO FACTI O QUAESTIO IURIS?, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, pp. 167 - 176 [2006], consultado con esta fecha en [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-34372006000100011#z](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100011#z)). En definitiva, tanto la corte como los autores concluyen que el hecho debe ser idóneo para producir el resultado dañino.

**Vigésimo séptimo:** Que, en efecto, en atención a lo razonado y de acuerdo al mérito de la prueba rendida en autos, no cabe sino concluir que el hecho que se invoca, esto es, la publicación del demandando en el boletín concursal en virtud de su calidad de



moroso, no es un presupuesto adecuado, ni idóneo, para efectos de generar los daños morales que en autos se alegan por parte del actor, puesto que ha quedado establecido que dicho acto por sí sólo no pudo desencadenar la ruptura total o parcial de los lazos afectivos personales, familiares o sociales que haya podido haber tenido el demandante de autos, sino que más bien dichos efectos adversos fueron detonados por problemas que, tal como lo indica el informe pericial, aparecen arraigados y sin tratamiento desde la niñez y adolescencia del demandante de autos, los cuales, hasta la fecha, no han sido tratados, sin perjuicio de haber existido desde las etapas antes mencionadas, por lo que, al no existir nexo causal entre el daño moral que sufre el demandante y el hecho que se le imputa a los dependientes del demandado de autos, deberá acogerse la excepción interpuesta de falta de configuración de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, por no encontrarse acreditado el elemento de la causalidad.

**Vigésimo octavo:** Que finalmente, en virtud de lo resuelto respecto de los elementos del daño y de la relación de causalidad, y sin que hayan podido configurarse los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual de los funcionarios del Banco demandado en autos, tampoco puede, por consecuencia, acreditarse la responsabilidad por el hecho ajeno que se pretende respecto del demandado de autos, por lo que la excepción entablada deberá acogerse.

**Vigésimo noveno:** Que, en consecuencia, deberá necesariamente desestimarse la demanda interpuesta por don Luis Enrique Halabi Lorca por los argumentos antes mencionados.

**Trigésimo:** Que las demás probanzas rendidas en nada alteran lo que se viene razonando.

Asimismo, modifíquese lo resolutivo del fallo que se complementa, quedando éste como sigue:

- I. Que se acoge la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria deducida por el Banco Santander-Chile, según se concluyó en el considerando décimo noveno del presente fallo.
- II. Que se rechaza la excepción de cosa juzgada, de conformidad a los argumentos expuestos en la motivación vigésimo primera.
- III. Que se acoge parcialmente la excepción de falta de legitimación activa, conforme a lo razonado en el considerando vigésimo segundo de la parte considerativa de esta sentencia.
- IV. Que se niega lugar a la demanda de indemnización de perjuicios en sede de responsabilidad extracontractual deducida por don Luis Enrique Halabi Lorca en contra del Banco Santander-Chile, por no haberse acreditado los presupuestos fácticos que hacen procedente la acción intentada.
- V. Que no se condena en costas al demandante, por no haber resultado totalmente vencido en autos.

Rija en todo lo demás la sentencia que se complementa, sin perjuicio de corregirse la numeración correlativa cuando fuere procedente. Forme lo expuesto parte de la sentencia que complementa y notifíquese conjuntamente con ésta.

Hecho, relévense los autos al expediente ingreso de Corte Civil-9523-2017 seguido ante la Excelentísima Corte de Apelaciones de Santiago, por así corresponder.

Rol N° 13848-2013.-



Dictado por doña Andrea Coppa Hermosilla, Juez Suplente del 23° Juzgado Civil de Santiago.-Autoriza doña Margarita Bravo Narváez, Secretaria Subrogante.-

En **Santiago**, a **veintinueve de Mayo de dos mil dieciocho**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 13 de mayo de 2018, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>

ANDREA TERESA COPPA HERMOSILLA  
Fecha: 29/05/2018 10:47:43

MARGARITA ISABEL BRAVO NARVAEZ  
Fecha: 29/05/2018 10:52:18